



**CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA**

**PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N.º 524-2017
LIMA**

Delitos de homicidio culposo y fuga en accidente de tránsito

Sumilla. El imputado tuvo derecho de apelar la sentencia de primera instancia que lo condenó (y le impuso una condena condicional), en caso hubiera estado disconforme con la determinación de su responsabilidad; sin embargo, no lo hizo. Recién ante la emisión de la sentencia de vista que incrementó su sanción, pretendió reclamar y alegar su inocencia, lo cual no resulta atendible, ya que la oportunidad que tuvo para cuestionar el juicio de culpabilidad precluyó desde el momento en que consintió la primera decisión.

Lima, catorce de agosto de dos mil dieciocho

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por el imputado Óscar Augusto Arroyo Galessio contra la sentencia de vista del tres de setiembre de dos mil catorce (folio cuatrocientos noventa y tres), la cual revocó el extremo de la sentencia de primera instancia del veintiocho de junio de dos mil doce (folio trescientos noventa y nueve), que impuso cuatro años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el término de tres años al citado encausado como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo, en agravio de Fidel Esteban Rivas Galloso, y por el delito contra la administración de justicia, en la modalidad de fuga en accidente de tránsito, en agravio de la sociedad; y, reformándola, le impusieron seis años de pena privativa de libertad. Con lo expuesto en el dictamen de la fiscal suprema en lo penal.

Intervino como ponente el juez supremo Castañeda Espinoza.

CONSIDERANDO

PRIMERO. ITINERARIO PROCESAL

Es menester precisar el procedimiento seguido en el caso de autos, pues el presente recurso de nulidad es de conocimiento de esta Sala Suprema



en mérito a la Ejecutoria Suprema recaída en la Queja Excepcional número doscientos cincuenta y nueve-dos mil quince, del dos de junio de dos mil dieciséis (folio quinientos cincuenta y cinco). En ese sentido, tenemos:

- 1.1.** Por sentencia de primera instancia del veintiocho de junio de dos mil doce (folio trescientos noventa y nueve), se condenó al imputado Óscar Augusto Arroyo Galessio como autor de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo, en agravio de Fidel Esteban Rivas Galloso, y contra la administración de justicia, en la modalidad de fuga del lugar de accidente de tránsito, en agravio de la sociedad; a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el término de tres años, asimismo le impuso el pago solidario –junto con el tercero civilmente responsable– de treinta mil soles por concepto de reparación civil a favor de los herederos legales del agraviado Fidel Esteban Rivas Galloso, e inhabilitación para conducir vehículos (suspensión de su licencia de conducir) por el término de tres años.
- 1.2.** A folio cuatrocientos doce, el representante del Ministerio Público apeló únicamente la sanción penal impuesta al procesado en la referida sentencia, y solicitó su incremento.
- 1.3.** En mérito a dicha impugnación, la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió la sentencia de vista del tres de setiembre de dos mil catorce (folio cuatrocientos noventa y tres), la cual revocó el extremo de la sentencia de primera instancia que impuso cuatro años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el término de tres años al imputado Óscar Augusto Arroyo Galessio como autor de los mencionados ilícitos; y, reformándola, le impusieron seis años de pena privativa de libertad efectiva.
- 1.4.** De acuerdo con el cargo de notificación de folio quinientos, el imputado fue notificado de la decisión de segunda instancia el



veinte de octubre de dos mil catorce; e interpuso su recurso de nulidad al día siguiente (folio quinientos seis).

- 1.5. Por resolución del veintisiete de octubre de dos mil catorce (folio quinientos once) la citada Sala Penal Superior declaró improcedente el recurso de nulidad que interpuso el aludido procesado, por tratarse de un proceso sumario; sin embargo, por Ejecutoria Suprema recaída en la queja excepcional número doscientos cincuenta y nueve-dos mil quince (de folio quinientos cincuenta y cuatro; puesta en conocimiento del aludido Tribunal Superior el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis) se ordenó la admisión a trámite del referido recurso de nulidad.
- 1.6. En mérito a ello, el citado órgano jurisdiccional emitió la resolución del tres de noviembre de dos mil dieciséis (folio quinientos sesenta y dos), y concedió al recurrente el plazo para que fundamente su impugnación; lo cual le fue notificado el veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis (cargos de folio quinientos sesenta y tres al quinientos sesenta y cinco).
- 1.7. El cinco de enero de dos mil diecisiete, el referido encausado cumplió con fundamentar su recurso de nulidad en el plazo previsto por ley, pues no se toma en cuenta para ello el lapso entre el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis al cuatro de enero de dos mil diecisiete, en que se suscitó la huelga de los trabajadores del poder judicial.
- 1.8. En ese sentido, corresponde emitir pronunciamiento de grado y no rechazar el recurso de nulidad por extemporáneo, como erróneamente opinó la fiscal suprema en lo penal en su dictamen de folio ocho (del cuadernillo formado ante esta Suprema Instancia).

SEGUNDO. IMPUTACIÓN FÁCTICA

Según la acusación fiscal (folio trescientos cincuenta y siete), el diez de octubre de dos mil nueve, aproximadamente a las cinco de la mañana, el imputado Óscar Augusto Arroyo Galessio conducía la camioneta jeep 4



X 4 (placa de rodaje número LGY-seiscientos treinta y nueve), de la empresa BBB Importaciones y Ventas, sin adoptar las medidas de precaución necesarias. Ingresó a un cruce de vías –donde el semáforo presentaba luz ámbar– a una velocidad no razonable, ni prudente para las circunstancias del momento y lugar, lo que no le permitió evitar embestir el vehículo de marca Chevrolet (placa de rodaje número CIO-quinientos treinta y siete), conducido por el agraviado Fidel Esteban Rivas Galloso, choque producido en la intersección de la avenida Javier Prado con la avenida Los Ingenieros; hecho que produjo el deceso de la víctima. Asimismo, se le atribuye al citado encausado haber fugado del lugar de los hechos, inmediatamente después de producido el accidente.

TERCERO. AGRAVIOS PLANTEADOS POR EL IMPUGNANTE

El imputado Óscar Augusto Arroyo Galessio fundamentó su recurso de nulidad (folio quinientos sesenta y siete), y alegó que:

- 3.1.** No existen medios de prueba que acrediten su responsabilidad penal. En la sentencia de vista no se valoraron los elementos a su favor; por el contrario, la recurrida es subjetiva y solo hace referencia a testigos no presenciales.
- 3.2.** En el dictamen acusatorio, la Fiscalía indicó que el proceso fue llevado irregularmente al haberse vencido el plazo de instrucción en exceso, y que no se advierte que el acusado haya lesionado al agraviado y se haya alejado del lugar de los hechos.
- 3.3.** No se estableció que el recurrente haya sido quien manejó el vehículo que embistió el automóvil que conducía la víctima.
- 3.4.** El factor predominante que ocasionó el accidente fue la acción del agraviado, quien ingresó con impudencia a una intersección sin respetar la señal de luz roja que transmitía el semáforo, por lo que fue la víctima quien incumplió con las reglas de tránsito.



CUARTO. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO

- 4.1.** Si bien en la Ejecutoria emitida en la queja excepcional de folio quinientos cincuenta y cuatro (que ordenó se dé trámite al recurso de nulidad) se indicó que en la sentencia de vista –al sustentar el incremento de la pena– se afirmó que el acusado aceptó haber manejado el vehículo, y que por lo tanto se habría afectado el debido proceso; sin embargo, conforme se detalló en los considerandos primero al 1.8 de la presente Ejecutoria Suprema, ante la emisión de la sentencia de primera instancia, el representante del Ministerio Público impugnó únicamente el extremo de la pena impuesta (ninguno de los sujetos procesales cuestionó la condena o ámbitos de responsabilidad del encausado); por ello, la sentencia de vista se pronunció solo sobre la sanción penal. No se emitió juicio de valor alguno respecto a la culpabilidad del procesado, pues el pronunciamiento de la sentencia de vista estaba delimitado únicamente al extremo de la pena que se impuso al acusado, en mérito al principio de congruencia recursal. Por tanto, los agravios que ahora esboza el citado imputado en su recurso de nulidad, destinados a cuestionar el juicio de condena y la responsabilidad penal, deben ser desestimados de plano.
- 4.2.** En efecto, el acusado tuvo derecho de apelar la sentencia de primera instancia que lo condenó (y que le impuso una condena condicional), en caso hubiera estado disconforme con la determinación de su responsabilidad; sin embargo, no lo hizo. Recién ante la emisión de la sentencia de vista que incrementó la sanción penal de cuatro a seis años, pretendió reclamar y alegar su inocencia, lo cual no resulta atendible, ya que, de acuerdo con los fundamentos expuestos, la oportunidad procesal que tuvo para cuestionar el juicio de culpabilidad precluyó desde el momento en que consintió dicha decisión de primera instancia.



- 4.3.** Por tanto, los únicos argumentos que se tomarán en cuenta deberán ser respecto a la pena privativa de libertad efectiva que se impuso al encausado en la sentencia de vista reformando el de primera instancia.

QUINTO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

A efectos de emitir la resolución correspondiente, y ante la concurrencia de dos ilícitos, es importante precisar que nos encontramos ante un concurso real de delitos (en la denuncia penal y en la sentencia de vista también así lo reconoce). De acuerdo con la imputación, en este caso concurrieron hechos punibles que son considerados como delitos independientes. El primero de ellos, referido a la acción que perpetró el acusado y desencadenó en la muerte de la víctima; y el segundo, que ante el accidente de tránsito fugó del lugar de los hechos. En ese sentido, teniendo en cuenta la fecha en que se perpetró el ilícito (diez de octubre de dos mil nueve), se deberá realizar el análisis correspondiente sobre la vigencia de la acción penal, ya que la sentencia contra el encausado no quedó firme en su totalidad –en razón de la unidad del proceso–. En dicho contexto, tenemos:

5.1. RESPECTO A LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.

5.1.1. El artículo ochenta del Código Penal preceptúa: “La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es pena privativa de libertad. En caso de concurso real de delitos, las acciones prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno”. Mientras el último párrafo del artículo ochenta y tres del mismo cuerpo legal, establece: “[...] la acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción”.

5.1.2. En dicho contexto, es preciso señalar que el delito de fuga en accidente de tránsito, previsto en el artículo cuatrocientos ocho del



Código Penal vigente al momento de ocurridos los hechos¹, sancionaba dicha conducta con pena privativa de libertad no mayor de tres años. Por tanto, el plazo ordinario de prescripción de la acción penal tiene el mismo término; al cual debe sumársele la mitad del mismo (un año con seis meses más) de acuerdo con la prescripción extraordinaria; teniendo así como lapso total para que opere la prescripción de la acción penal, cuatro años con seis meses.

5.1.3. En ese sentido, en atención a la fecha en que se perpetró el ilícito de fuga de accidente de tránsito, en este caso concreto –diez de octubre de dos mil nueve–, la acción penal prescribió por el transcurso del tiempo el diez de abril de dos mil catorce. Es decir, al momento de la emisión de la sentencia de vista (tres de setiembre de dos mil catorce), la acción penal, respecto a este extremo, ya había prescrito.

5.1.4. Es menester precisar que de la revisión de autos no se aprecia resolución que haya declarado reo contumaz al citado imputado, por lo que el plazo para que opere la prescripción de la acción penal no se suspendió. Además, tampoco se hace mención al tiempo transcurrido desde que el recurrente interpuso su queja excepcional hasta que la Sala Penal Suprema puso en conocimiento del Tribunal Superior su decisión sobre dicha queja, pues el delito de fuga de accidente de tránsito había prescrito mucho antes de estas últimas actuaciones; inclusive –conforme se advirtió en el considerando precedente– antes de la emisión de la sentencia de segunda instancia.

¹ Código Penal. Artículo 408. Fuga en accidente de tránsito: "El que, después de un accidente automovilístico o de otro similar en el que ha tenido parte y del que han resultado lesiones o muerte, se aleja del lugar para sustraerse a su identificación o para eludir las comprobaciones necesarias o se aleja por razones atendibles, pero omite dar cuenta inmediata a la autoridad, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años y con noventa a ciento veinte días-multa".



5.1.5. En consecuencia, la acción penal –respecto al mencionado ilícito de fuga en accidente de tránsito– se extinguió, por lo que procede así declararse. En ese sentido, resulta inoficioso emitir pronunciamiento sobre la pena que se impuso al mencionado imputado en este extremo; teniendo en cuenta para ello –conforme se precisó en los considerandos anteriores–, la unidad de proceso; pues la sanción es consecuencia de la condena al aludido procesado; por tanto, su sentencia no quedó firme. Este Tribunal Supremo mal haría en pronunciarse sobre el extremo de la pena de un delito que, conforme ya se indicó, ha prescrito.

5.1.6. Lo contrario sucede respecto al delito de homicidio culposo, previsto en el segundo párrafo, del artículo ciento once, del Código Penal vigente al momento de perpetrado el ilícito²; el cual sanciona aquél ilícito con pena privativa de libertad no menor de cuatro, ni mayor de ocho años. Por tanto, teniendo en cuenta el plazo ordinario (ocho años) y extraordinario (cuatro años) para que opere la prescripción de la acción penal es de doce años; a la fecha, la misma sigue vigente (han transcurrido nueve años). Por tanto, corresponde emitir pronunciamiento respecto a la sanción que se impuso sobre dicho ilícito.

5.2. EN CUANTO A LA DETERMINACIÓN DE LA PENA

Conforme se precisó en los considerandos cuarto al 4.3 de la presente, el objeto de pronunciamiento en esta Ejecutoria Suprema está delimitada a los argumentos esbozados por el recurrente que se refieran únicamente a la pena privativa de libertad efectiva que se le impuso en la sentencia de vista del tres de setiembre de dos mil

² Código Penal. Artículo 111. Homicidio Culposo: “[...] La pena privativa de la libertad será no menor de cuatro años ni mayor de ocho años e inhabilitación, según corresponda, conforme con el artículo 36, incisos 4, 6 y 7, cuando el agente haya conducido un vehículo motorizado bajo el efecto de estupefacientes o en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0,5 gramos-litro, o cuando sean varias las víctimas del mismo hecho o el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito”.



catorce (pues el juicio de culpabilidad quedó firme desde la emisión de la sentencia de primera instancia, y ninguno de los sujetos procesales, incluyendo el acusado, cuestionó ese extremo). En ese sentido, tenemos:

5.2.1. Para la determinación de la pena privativa de libertad se debe tener en cuenta el principio de proporcionalidad contemplado en el artículo VIII, del Título Preliminar, del Código Penal; que procura la correspondencia entre el injusto cometido y la pena a imponerse, y que estas, en rigor, deben cumplir los fines que persigue la pena de ser preventiva, protectora y resocializadora.

5.2.2. Se tiene presente, además, que la sentencia de vista recurrida por el encausado (y que es objeto de este pronunciamiento) se emitió en mérito a la impugnación que efectuó el representante del Ministerio Público sobre el extremo de la pena que determinó la sentencia de primera instancia de cuatro años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el término de tres años bajo reglas de conducta; habiendo sido reformada en la sentencia de vista – finalmente– a la pena privativa de libertad efectiva de seis años. Ello faculta a este Tribunal Supremo a revisar la pena impuesta e, inclusive, en caso de disminuirla y suspenderla en su ejecución, a imponer y determinar proporcionalmente reglas de conducta. De igual manera, se considera que la acción penal, respecto al delito de fuga en accidente de tránsito prescribió por el transcurso del tiempo, conforme se ha desarrollado en los apartados quinto al 5.5 de la presente Ejecutoria.

5.2.3. En dicho contexto, se aprecia que la Sala Penal Superior, al expedir la sentencia de vista, incrementó la sanción al encausado Óscar Augusto Arroyo Galessio a seis años de pena privativa de libertad efectiva (al incrementar la sanción de cuatro años suspendida en su ejecución por el término de tres años bajo el cumplimiento de reglas de conducta que le impuso la sentencia de primera instancia); sin embargo, es menester precisar que dicho incremento se sustentó en la condena



por dos delitos: fuga en accidente de tránsito y homicidio culposo; sin embargo, habiendo prescrito el primero de los mencionados, queda únicamente el último delito. Ante ello, este Colegiado Supremo considera que resulta pertinente y proporcional al caso de autos, que la pena a imponerse al referido acusado –teniendo en cuenta, para ello, sus condiciones personales y su participación en el injusto–, sea de cuatro años suspendida en su ejecución por el término de tres años, bajo el cumplimiento de reglas de conducta, entre las cuales deberá imponerse el pago solidario de la reparación civil con el tercero civilmente responsable.

5.2.4. Respecto a este último punto (el determinar como regla de conducta el pago de la reparación civil; pues la solidaridad de dicho pago, junto con el tercero civilmente responsable, quedó determinada desde la sentencia de primera instancia), deberá tenerse en cuenta lo establecido en el inciso cuatro, del artículo cincuenta y ocho, del Código Penal. En ese sentido, es menester señalar que el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente número cero tres cinco cinco seis-dos mil doce-PHC/TC, reafirmando lo establecido en la sentencia derivada del Expediente número uno cuatro dos ocho-dos mil dos-HC/TC (fundamento segundo) precisó:

[...] la exigencia del pago de la reparación del daño ocasionado por la comisión del delito, como regla de conducta cuya inobservancia derivaría en la revocación de la suspensión de la pena, tiene asidero en que dicha obligación no es de naturaleza civil, por cuanto, al encontrarse dentro del ámbito del derecho penal, se constituye en una condición para la ejecución de la pena; consecuentemente, no es que se privilegie el enriquecimiento del erario nacional o el carácter disuasorio de la pena en desmedro de la libertad individual del condenado sino, fundamentalmente, la propia eficacia del poder punitivo del Estado y los principios que detrás de ella subyacen, como son el control y regulación de las conductas de acuerdo con ciertos valores y bienes jurídicos que se consideran dignos de ser tutelados.

Aunado a ello, deberá decretarse el apercibimiento expreso de aplicarse lo dispuesto por el artículo cincuenta y nueve del Código



Penal, en caso de incumplimiento de las reglas de conducta impuestas.

5.3. SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA PRESCRIPCIÓN EN EL MONTO DE LA REPARACIÓN CIVIL

Al haber prescrito el delito de fuga en accidente de tránsito, resulta de suma importancia precisar que dicha prescripción no afecta en absoluto el monto que se fijó por concepto de reparación civil en la sentencia de primera instancia (que no fue materia de impugnación por el recurrente) que se impuso al acusado, además el pago solidario –junto con el tercero civilmente responsable– de treinta mil soles por el delito de homicidio culposo (extremo que no objetaron); pues no se determinó una cantidad por el mismo concepto en cuanto al delito –ya prescrito– de fuga en accidente de tránsito. En ese sentido, la cantidad que se fijó por reparación civil sobre el delito de homicidio culposo deberá mantenerse. Es menester aclarar, además, que dicho pago es a favor de los herederos legales del agraviado por este delito, Fidel Esteban Rivas Galloso, y no directamente a él, como erróneamente consignó la parte decisoria de la sentencia de primera instancia.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon:

- I. HABER NULIDAD** en la sentencia de vista del tres de setiembre de dos mil catorce (folio cuatrocientos noventa y tres), que revocó el extremo de la sentencia de primera instancia del veintiocho de junio de dos mil doce (de folio trescientos noventa y nueve), que impuso cuatro años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el término de tres años, bajo reglas de conducta, al imputado Óscar Augusto Arroyo Galessio, como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo, en agravio



de Fidel Esteban Rivas Galloso, y por el delito contra la administración de justicia, en la modalidad de fuga en accidente de tránsito, en agravio de la sociedad; y le impuso seis años de pena privativa de libertad por los citados delitos y agravios; y, **REFORMÁNDOLA**, actuando en sede de instancia: **DECLARARON PRESCRITA** la acción penal a favor del citado encausado por el delito contra la administración de justicia, en la modalidad de fuga en accidente de tránsito, en agravio de la sociedad; **DISPUSIERON** la anulación de sus antecedentes policiales y judiciales que se hubieran podido generar por este extremo, y el archivo definitivo de los actuados en cuanto a este delito se refiere.

- II. HABER NULIDAD** en la referida sentencia de vista del tres de setiembre de dos mil catorce (folio cuatrocientos noventa y tres), en el extremo que impuso seis años de pena privativa de libertad efectiva al imputado Óscar Augusto Arroyo Galesio; y, **reformándola, LE IMPUSIERON** cuatro años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el término de tres años, bajo las siguientes reglas de conducta: **a)** Dar cuenta de sus actividades, personal y obligatoriamente, ante el juez de la causa. **b)** Concurrir cada treinta días naturales al Juzgado en el que se tramite la ejecución de su condena, a fin de registrar su asistencia en el sistema de control biométrico y dar cuenta de sus actividades. **c)** No cometer nuevo delito doloso. **d)** Cumplir con el pago solidario de la reparación civil junto con el tercero civilmente responsable, a favor de los herederos legales del agraviado Fidel Esteban Rivas Galloso. Todo ello bajo apercibimiento expreso de aplicarse lo dispuesto por el artículo cincuenta y nueve del Código Penal en caso de incumplimiento de las reglas de conducta impuestas; por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo, en agravio de Fidel Esteban Rivas Galloso; **DISPUSIERON** se dejen sin efecto las



**CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA**

**PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N.º 524-2017
LIMA**

órdenes de ubicación y captura que se impartieron contra el citado encausado, debiendo oficiarse vía fax a la Sexta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima para tales efectos. Y los devolvieron.

Intervino la jueza suprema Chávez Mella por licencia del juez supremo Salas Arenas.

S. S.

LECAROS CORNEJO

QUINTANILLA CHACÓN

CHAVES ZAPATER

CASTAÑEDA ESPINOZA

CHÁVEZ MELLA

CE/jcpb